



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Verbal – Responsabilidad Civil Extracontractual
DEMANDANTES	Ana María Pérez Martínez y otra
DEMANDADAS	Luz Dary Franco Zuleta y otra
AUTO	Confirma decisión
RADICADO	05001 31 03 003 2022 00235 01

Medellín, veintidós de marzo de dos mil veinticuatro

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por Seguros Generales Suramericana S.A., codemandada en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En proveído de 17 de octubre de 2023, el Juzgado 003 Civil del Circuito de Medellín, decretó las pruebas solicitadas por la codemandada Seguros Generales Suramericana S.A., sin embargo, negó la petición de oficiar a la Fiscalía General de la Nación, a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, al Instituto de Medicina Legal y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sopetrán, porque lo requerido de esas entidades obraba en el proceso y sería inútil oficiar. Tampoco se accedió a oficiar a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y a las entidades de seguridad social; por una parte, porque la demandada no precisó cuáles hechos pretendía demostrar, ni la relación que esos documentos tuvieran con alguno de los hechos de la demanda y, por otro lado, porque los documentos relacionados con la ARL, Fondo de Pensiones y la EPS de la víctima directa se pudieron obtener por medio del derecho de petición.

1.2. Inconforme con esa decisión, la apoderada judicial de Seguros Generales Suramericana S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación dirigidos a que lo resuelto fuera revocado y en su lugar se accediera a la

práctica de las pruebas pedidas. Con ese propósito, sostuvo que en el expediente solo obraba una certificación de la Fiscalía 088 Seccional Delegada ante Jueces Promiscuos del Circuito de Sopetrán en que se informó que se adelantaba investigación por la conducta punible de homicidio culposo, pero lo requerido era que se remitiera copia completa del expediente identificado con el SPOA 05042 61 000 82 2017 80210. Así mismo, señaló que, si bien en el expediente obraba la historia clínica, se requería el resultado de toxicología, prueba de alcoholemia, orina, sustancias psicoactivas, etc., que se le hizo a Jhovanny Andrés Aguilera, por lo que la prueba estaba incompleta y sí mediaba derecho de petición. Señaló que en el plenario no reposaba el resultado de toxicología ni prueba de alcoholemia, orina y sustancias psicoactivas de los exámenes hechos por Medicina Legal, lo cual había sido solicitados mediante derecho de petición.

La recurrente también expuso que en el escrito de contestación se anotó que se requería oficiar a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., para que determinara la suma cancelada por el SOAT, debido a que, el seguro de automóviles opera en exceso de este y así fue expresado en los hechos y las excepciones. Igualmente advirtió sobre la necesidad de oficiar a los demandantes para que informaran a cuál ARL, Fondo de Pensiones y la EPS estaba afiliado el señor Aguilera, para que una vez se obtuviera dicha información, se les oficiara y certificaran si habían hecho algún pago por incapacidad, pensión, indemnización o reembolso de gastos como consecuencia de la muerte de este, porque la póliza opera en exceso de los pagos del SOAT. En cuanto al pago de indemnizaciones apuntó que los demandantes tienen acceso a los comprobantes de dichos pagos, pues ante una eventual condena a la entidad demandada, es indispensable conocer lo pagado a título de indemnización, de lo contrario se pagaría doble indemnización por los mismos hechos.

Por último, adujo que esos medios de prueba, son conducentes y pertinentes, porque versan sobre hechos del debate y son aptos para demostrar lo que se quiere establecer, como el daño emergente y el lucro cesante, pues la indemnización que reciban los demandantes por cualquier concepto se debe deducir, en el evento de una condena.

1.3. Surtido el traslado respectivo, sin que mediara pronunciamiento de la contraparte, el Juzgado 003 Civil del Circuito de Medellín en proveído de 30 de noviembre de 2023 repuso parcialmente la decisión y dispuso oficiar a la Fiscalía 088 Seccional de Sopetrán para que allegara la copia de todo el expediente SPOA 0504026100082201780210 en el que obre el resultado de la prueba toxicológica efectuada a Jhovanny Andrés Aguilera; así mismo, ordenó oficiar a Mapfre para que certificara los valores pagados por SOAT correspondiente al vehículo de placas FGV137 por los hechos ocurridos el 2 de julio de 2017, en los que falleció el señor Aguilera. En lo demás, confirmó lo resuelto y concedió la alzada.

Como cimiento de la decisión tuvo en consideración que revisado el archivo 025 del C01 se podía observar que parte de lo solicitado se encontraba en el proceso, a saber, la copia del proceso penal SPOA anteriormente referenciado y la copia de la historia clínica de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios en que se relaciona toda la atención prestaba al señor Aguilera con ocasión del accidente de tránsito, sin embargo, no reposaba los resultados del examen toxicológico hecho a la persona en mención. Así las cosas, y dado que la aseguradora demandada hizo las gestiones para obtener la información requerida, ordenó oficiar a la Fiscalía 088 Seccional de Sopetrán para que allegara copia del expediente penal incluido el examen de toxicología del causante. De igual modo, en relación con la petición de oficiar a Mapfre, el despacho precisó que, en el acápite de excepciones la aseguradora Suramericana S.A. argumentó un pago o solución parcial, con ocasión de lo que el SOAT hubiere cancelado, por lo que la prueba procedía.

Por otra parte, en relación con el requerimiento a los demandantes para que informaran a cuáles entidades de seguridad social estaba afiliado el señor Aguilera, el despacho concluyó que no había lugar a reponer lo resuelto, debido a que, lo que la aseguradora pretende probar con dichos documentos era que en el evento de que se hubiera hecho algún pago a los demandantes correspondiente a la seguridad social, ese pago constituiría una doble indemnización, no obstante, la prueba resulta inútil, debido a que, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha decantado que los pagos por concepto de seguridad social que se haga a la víctima, son acumulables a la indemnización de perjuicios.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 168 del Código General del Proceso prevé el rechazo de plano de las pruebas. Al respecto, la norma en cita señala:

"ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles."

2.2. Respecto del derecho a probar y sus límites, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC14244 de 2021 precisó:

Sobre el particular, la Corte, ha dicho que dicha garantía

(...) se traduce (...) en un derecho a probar los hechos que determinan la consecuencia jurídica a cuyo reconocimiento, en el caso litigado, aspira cada una de las partes. Se trata de una aquilatada garantía de acceso real y efectivo a los diferentes medios probatorios, que le permita a las partes acreditar los hechos alegados y, desde luego, generarle convencimiento al juez en torno a la pretensión o a la excepción.

*Al fin y al cabo, de antiguo se sabe que el juez debe sentenciar conforme a lo alegado y probado (iuxta allegata et probata iudex iudicare debet), razón por la cual, **quienes concurren a su estrado deben gozar de la sacrosanta prerrogativa a probar los supuestos de hecho del derecho que reclaman, la que debe materializarse en términos reales** y no simplemente formales, lo cual implica, en primer lugar y de manera plena, hacer efectivas las oportunidades para pedir y aportar pruebas; en segundo lugar, **admitir aquellos medios probatorios presentados y solicitados, en cuanto resulten pertinentes y útiles para la definición del litigio**; en tercer lugar, brindar un escenario y un plazo adecuados para su práctica; en cuarto lugar, promover el recaudo de la prueba, **pues el derecho a ella no se concreta simplemente en su ordenamiento, sino que impone un compromiso del Juez y de las partes con su efectiva obtención; y en quinto lugar, disponer y***

practicar aquellas pruebas que de acuerdo con la ley, u oficiosamente el juez, se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos en torno a los cuales existe controversia (CSJ SC 28 jun. 2005, rad. 7901).

Claro, no es un derecho absoluto, pues, debe ejercerse bajo ciertas condiciones, con miras a que el conflicto sometido a composición judicial se decida adecuadamente.

Así, el interesado no puede llevar, deliberadamente, cualquier prueba al proceso, ni acreditar cualquier supuesto fáctico. Los medios suasorios aducidos han de ser i) lícitos, ii) conducentes, iii) pertinentes y iv) útiles en relación con la controversia en la que se invocan, esto es, i) que no estén prohibidos o se hayan obtenido con violación de derechos fundamentales, ii) que sean idóneos legalmente para demostrar determinado hecho, iii) que guarden relación con los supuestos fácticos que se pretende demostrar y los que originaron la polémica, y iv) que sean necesarios para esclarecer el debate.”

2.3. Respecto de la acumulación de indemnizaciones, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC506 de 2022 indicó:

“Los postulados anteriores se han replicado en tiempos más próximos por esta Sala, abriéndose paso el criterio de que las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social o de riesgos profesionales (pensión de vejez, de invalidez o sobreviviente) no tienen naturaleza indemnizatoria, dado que su origen deviene de los aportes realizados para dichos riesgos, sin atender la verificación de un daño o su cuantía, por lo que no devendría per se incompatible el pago de la pensión de invalidez o sobreviviente con la indemnización de perjuicios a cargo de un tercero causante del daño sufrido por el empleado, precisándose «que bien distintas son las acciones para reclamar indemnización y prestaciones sociales en asuntos laborales, de las civiles para demandar resarcimiento de perjuicios, por corresponder a fuentes diferentes; en aquella, lo será el contrato de trabajo y/o las leyes laborales que regulan el sistema de seguridad social, según el caso, y en esta, el daño infringido a la víctima,

que puede o no venir precedida de una relación jurídica preexistente». SC2498-2018 de 3 de jul. Rad. 2006-00272-01. Ver también las sentencias SC17494-2014, SC295-2021)."

CASO EN CONCRETO

El recurso formulado plantea resolver si el juzgado de primera instancia tuvo razón al negar la prueba encaminada a oficiar a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios y al Instituto de Medicina Legal en relación con la prueba de toxicología hecha a Jhovanny Andrés Aguilera y se oficiara a los demandantes para que informaran a cuáles entidades de seguridad social estaba afiliado el señor Aguilera, con el fin de que se pudiera comprobar si se hizo algún pago por concepto de seguridad social y lograr una posible reducción de indemnización por pago doble.

Al respecto, esta dependencia judicial encuentra ajustado a derecho lo definido por el juez de primer grado porque, en relación con la solicitud encaminada a que se oficie a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios y al Instituto de Medicina Legal para que allegara el informe de toxicología del causante, se ordenó oficiar a la Fiscalía 088 Seccional de Sopetrán para que arrimara la copia completa del expediente penal SPOA 0504026100082201780210 en que reposara el informe de toxicología pretendido, por lo tanto, sería innecesario y por ende inútil, oficiar a tales entidades, pues con la prueba decretada se obtendrá la información solicitada por la aseguradora demandada; aunado a ello, se evidencia que a folios 74-75 del archivo 025 del expediente digital obra respuesta emitida por el Instituto de Medicina Legal en que informó que el examen de toxicología efectuado al occiso había sido remitido a la Fiscalía en mención.

Ahora, en lo atinente a la petición de oficiar a la parte demandante para que informara las entidades de seguridad social a las que se encontraba afiliado el fallecido, con el fin de determinar si había existido algún pago para la eventual reducción de la indemnización, este despacho encuentra que la decisión del juez de primera instancia –quien como director del proceso– negó la práctica de la prueba por impertinente e inútil, está apoyada en razones admisibles y se aviene con lo que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto


en los eventos en que la víctima directa o indirecta ha recibido algún pago proveniente de las entidades de seguridad social, con base en que tal prestación económica no tiene naturaleza indemnizatoria, al originarse en los aportes del afiliado al sistema, por lo que no constituye una doble indemnización. En este sentido, el análisis del juez de primer grado, se enmarca en los principios de autonomía e independencia judicial, y encuentra respaldo en el criterio expuesto sobre la materia.

Consecuente con lo dicho, este despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de 17 de octubre de 2023 proferido por el Juzgado 003 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Sin condena en costas porque no se causaron.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada